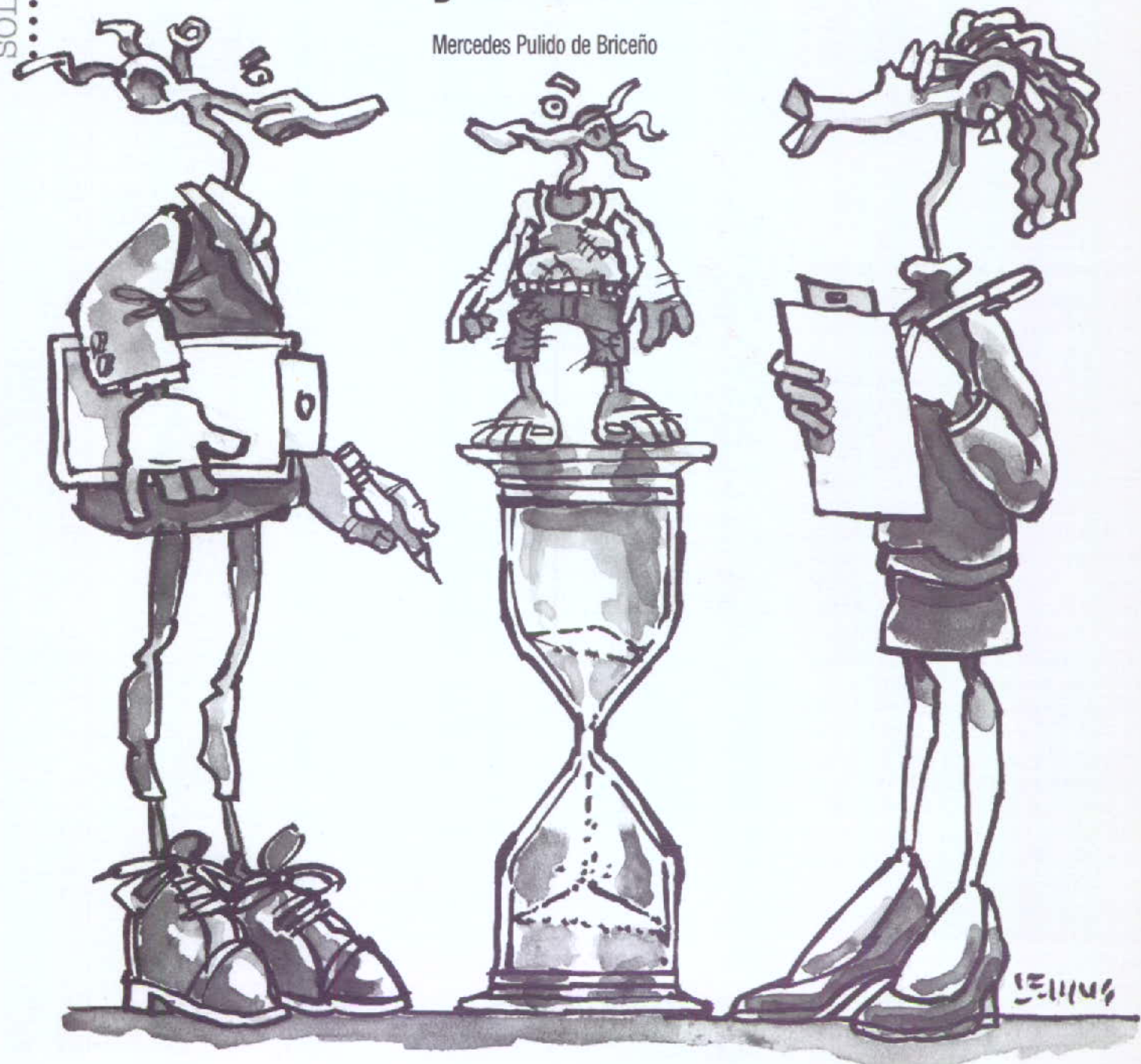


2002

Deterioro, conflictividad y alternativas

Mercedes Pulido de Briceño



2002

El entorno conflictivo que se había potencializado con la firma de las 49 leyes que integran el mandato habilitante, el paro convocado por Fedecámaras y la CTV el 9 de diciembre de 2001, y la ausencia de reconocimiento de las nuevas autoridades sindicales impulsaron crecientes manifestaciones opositoras, sin que el gobierno diera señales de cambio y se buscara un diálogo conciliador. El 12 de febrero el Gobierno propone el ajuste fiscal que entre otros efectos generó una inflación del 31%, la congelación de los salarios, el recorte en las asignaciones a las gobernaciones y alcaldías con impacto en los servicios de educación, salud y empleo, mayor carga impositiva sin planes de compensación social para los sectores más vulnerables. El empobrecimiento de la población se agudiza y el sector empresarial y el laboral con el auspicio de la Iglesia Católica proponen un acuerdo para construir un pacto social que lleve a enfrentar la pobreza, el desempleo y la productividad. En abril, la tensión se recrudeció con los despidos en la gerencia de PDVSA, los pronunciamientos militares que se venían realizando desde el mes de febrero, las amenazas autoritarias, factores que movilizaron una inmensa oposición. Por otra parte, el gobierno radicalizó el enfrentamiento con los empresarios y los medios de comunicación lo que conformó los "sucesos de abril" profundizando el deterioro de la credibilidad institucional, cuestionando la legitimidad gubernamental, y por ende de la gobernabilidad. El deterioro socioeconómico se agudiza y sin esperanzas de que

mejore. El gobierno sobrevive sin capacidad para convocar y lograr confianza para el pacto social necesario ante la situación actual y la oposición, si bien es una mayoría creciente, carece de los liderazgos civiles claros y sólidos que permitan superar los enfrentamientos de intereses.

La pobreza: corresponsabilidad del todo social

La pobreza es el eje sobre el cual se sustenta lo indeseable y excluyente de una sociedad. Es un problema de toda la sociedad por ser el obstáculo para el desarrollo de las condiciones de vida a las cuales aspira el promedio de los ciudadanos. Esto implica entender que la pobreza no es únicamente un residuo del crecimiento económico, sino que tiene múltiples dimensiones culturales, sociales, e institucionales, que reflejan heterogeneidad y complejidad. De allí, la necesidad de construir un acuerdo político con objetivos compartidos por todos los agentes de la sociedad y que puedan movilizar y comprometer a toda la sociedad para cumplirlos.

El crecimiento económico y la distribución del ingreso son elementos cruciales no sólo para aumentar la participación en la riqueza, sino para mantener la propia producción de bienes y servicios que puedan satisfacer las necesidades. La educación, la salud y la seguridad son definitivos en generar capacidades para producir y participar en la riqueza. El desempleo unido a la informalidad laboral alcanza al 70% de la población económicamente activa; ambas realidades aumentan

la probabilidad de mayor pobreza. El deterioro institucional genera aún mayor desigualdad, porque quienes más necesitan respuestas eficientes son los pobres. La discrecionalidad o ausencia de normas colectivas, la ambigüedad de objetivos, los servicios sociales insuficientes o de mala calidad son componentes fundamentales para la exclusión social. Sólo el efecto acumulativo de una acción concertada puede ir transformando la realidad social que nos circunda. Tener una visión de futuro implica comprometernos en la meta común, construir el consenso entre la diversidad de grupos sociales, políticos y económicos para superar la tentación de las coyunturas de los cambios democráticos y estar dispuestos a mantener los esfuerzos en la transformación de la exclusión.

Tiempo necesario para superar la pobreza

Crecimiento de los ingresos reales en 2%

Erradicar la pobreza	35,1 años	2035
Eliminar pobreza crítica	27,3 años	2026

Crecimiento de los ingresos reales en 3%

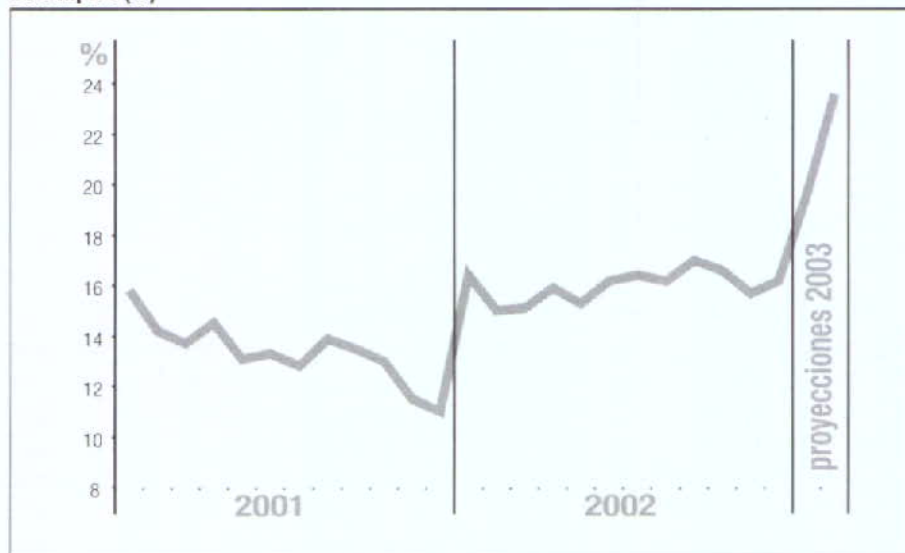
Erradicar la pobreza	24,1 años	2023
Eliminar la pobreza crítica	16,3 años	2017

Fuente: IIES. UCAB 2002.

Los hechos para el 2002

En los tres años de gobierno la grave pobreza heredada se ha acentuado, aunado a una confrontación social y política. El desempleo alcanza niveles del 18% y las estimaciones para el primer semestre de 2003 lo sitúan conservadoramente en

Desempleo (%)



Fuente: El Universal. INE. Proyecciones Datánalisis

23%, casi un cuarto de la población económicamente activa. La Cámara de la Construcción indica un 55% de desempleo en este sector generador de ingresos para la población menos capacitada. El sector comercio perdió 520.000 puestos de trabajo. A tres años se sigue difiriendo la implantación de un sistema de seguridad social que pudiera amortiguar el deterioro de la calidad de vida de la familia trabajadora.

Se han cerrado más de 4.000 empresas medianas y pequeñas, la salida de capitales es constante y las inversiones extranjeras no perciben garantías, ni estabilidad política. En cuanto al manejo de conflictos no hay ninguna institución que tenga credibilidad para el arbitraje, tal es el caso del Ministerio del Trabajo al marginar los métodos de negociación colectiva y desconocer la legitimidad de la CTV ganada en referéndum abierto.

La inseguridad y la violencia constituyen las grandes amenazas de la sociedad venezolana. Desde el año 2000, la tasa de mortalidad por homicidios y suicidios es de 31,6 por cada 100.000 habitantes y hoy en día figura entre las cinco principales causas de defunción de los venezolanos. La violencia civil en las manifestaciones políticas ha dejado un

saldo de 47 personas asesinadas y 775 heridos, de los cuales 469 fueron impactados por armas de fuego. A casi un año de los sucesos del 11 de Abril no hay voluntad política para asumir las investigaciones y la asignación de responsabilidades, lo mismo puede decirse de los asesinatos cometidos en la Plaza de Altamira. Más de 200 casos de agresión a profesionales de los medios de comunicación y buena parte de las medidas cautelares de protección acordadas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA no han sido acatadas por el Estado. Con la intervención y desarme de la Policía Metropolitana el delito aumentó en 150% en el último trimestre de 2002 en el área metropolitana, alcanzando a nivel nacional la cifra anual de 9.244 personas asesinadas. Ya hay casos de sicariato, intimidación, presión judicial y militarización. COFAVIC en el informe anual señala más de 120 denuncias de violaciones gravísimas a los derechos humanos, reiterando que la impunidad se ha profundizado en el país. Es notoria la organización de autoprotección vecinal frente a la incertidumbre de la violencia política y las contingencias que pudieran presentarse. Todo ello ha significado armamentismo y organización ante amenazas reales o

imaginarias, pero amenazas al fin.

La acumulación de la conflictividad y la desinstitucionalización ha hecho evidente la fragmentación de la sociedad venezolana. Sin embargo, durante el año que termina han sido constantes las expresiones de amplios sectores por encauzar nuestros graves problemas por la vía civilizada del diálogo, la construcción de consensos y el rechazo a la violencia. La búsqueda de salidas pacíficas y democráticas sólo será posible si entendemos que la convivencia implica un esfuerzo mancomunado de reconocer las diferencias, reconocer que ninguno de los bandos es tan fuerte para imponerse al otro, reconocer que todos tenemos que ser parte de la solución, hecho que ha sido ampliamente demostrado con las movilizaciones masivas de apoyo a los valores fundamentales de solidaridad, responsabilidad y libertad. A los frustrantes indicadores de nuestra situación social probablemente hay que reconocer la emergencia de la conciencia colectiva de construir ciudadanía. Y ése es el verdadero logro de la crisis que vivimos.

Mercedes Pulido de Briceño

Psicóloga social. Miembro del Consejo de SIC.